



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SALA LABORAL

Medellín, junio 3 de 2021

Radicado: 05001- 31- 05-**002-2015-01676-01**

Demandantes JOHN BAYRON DÍAZ VASCO, GUILLERMO LEÓN GARCÉS  
RAMÍREZ Y LUIS EDUARDO VASCO GALVIS

Demandados EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN ESP -EMVARIAS

Asunto: CONSULTA DE SENTENCIA- CONTRATO REALIDAD

La Sala Sexta de Decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia, la que se expone en forma escrita atendiendo a las disposiciones del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

**ANTECEDENTES**

Pretenden los actores la declaratoria de una relación laboral por término indefinido con las Empresas Varias de Medellín SA ESP – en adelante EMVARIAS- , pretendiendo su vinculación a la planta de personal de la entidad, aunado al pago

de salarios y prestaciones sociales legales y convencionales dejadas de percibir, así con la sanción moratoria de que trata el artículo 65 del CST por mora en el pago de beneficios laborales.

En sentencia que desató la primera instancia, indicó que no se probó que la accionada Emvarias ejerciera poder subordinante alguno respecto a los servicios prestados por los demandantes, en tanto la dirección del servicio se ejerció a través de los coordinadores de la Fundación Universidad de Antioquia o cooperativas a través de las cuales tuvieron un contrato laboral los actores, que a su vez había una interventoría administrativa, operativa y financiera, por parte del Colegio Mayor de Antioquia, por lo que señaló que no existió un vínculo de naturaleza laboral con la demandada, absolviendo de todas las pretensiones.

Decisión que no fue recurrida por las partes, pero al ser totalmente adversa a las pretensiones de los trabajadores, conoce esta corporación en el grado de consulta (artículo 69 CPTSS).

### **ALEGATOS**

Concedido el término establecido en el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, la accionada expresó que Emvarias a través de convenios de colaboración interinstitucionales ha delegado la prestación de servicios, los que se han desarrollado por los contratistas con autonomía y bajo la interventoría de agentes externos a la accionada, donde la subordinación de los trabajadores de las contratistas la ejercen sus propios coordinadores o supervisores.

En relación a la parte actora, se tendrán en cuenta las alegaciones adosadas al expediente el 22 de junio de 2018 (fls. 249/268), en tanto aquellos recibidos por medios electrónicos el 18 de enero de 2021, fueron extemporáneos, conforme a

los parámetros establecidos en el artículo 15 del Decreto 806 de 2020 y el auto que abrió paso a los alegatos en esta instancia (fl. 278).

En su escrito, la activa refiriéndose de forma indistinta a las figuras de contratista independiente y simple intermediario (artículo 34 y 35 del CST) señaló que no puede entenderse que los demandantes realizaran las labores con autonomía, en tanto ejercían actividades misionales de la empresa, acudiendo a las instalaciones de Emvarias y usando el camión de recolección propiedad también de esta, por lo que debe entenderse que la accionada ha hecho uso indebido de figuras jurídicas para evadir su responsabilidad.

### **CONSIDERACIONES**

Pues bien, destaca la sala que el escrito introductorio hace relación indistinta a conceptos de intermediación laboral y solidaridad del empleador con el beneficiario de la labor, enunciando la existencia de cooperativas de trabajo asociado, empresas de servicios temporales y la Fundación Universidad de Antioquia sin concretar unos cargos o argumentación que permita establecer una senda de estudio, sin embargo ello no es óbice para emitir una decisión de fondo, en tanto corresponde al funcionario judicial interpretar el contenido de la demanda bajo un análisis holístico, sin que se supla la voluntad de la parte o se alteren sus factores esenciales (Sala Laboral CSJ radicado 27477 de febrero 14 de 2005)

Es así que concluye la sala que la demanda va dirigida a probar que al ejercer los actores actividades propias a la misión de las Empresas Varias de Medellín, hay lugar a reputar a aquel empleador de los accionantes, dando lugar a la retribución de beneficios y derechos laborales.

Para efectos de dilucidar tal asunto, la sala hará algunas consideraciones relativas a la naturaleza jurídica de la entidad, la forma como se presenta la contratación, para luego entrar al análisis probatorio.

En cuanto a la ***naturaleza jurídica de la entidad accionada***, atendiendo al certificado de existencia y representación (fls. 117/121) las Empresas Varias de Medellín estaba constituida como Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, empero el Concejo de Medellín a través del Acuerdo N° 21 de mayo 17 de 2013, autorizó la transformación de la entidad en empresa oficial de servicios públicos domiciliarios, organizada como sociedad por acciones, regida por sus estatutos, lo que incluye entre otros aspectos que “...conforme lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C 691/07, los empleados de la sociedad serán trabajadores oficiales; sin embargo, la Junta Directiva precisará qué actividades de dirección o confianza serán desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleados públicos” (numeral 8 – funciones del gerente - folios 177/121)

De acuerdo a esta calidad, las normas que gobiernan sus relaciones laborales son la Ley 6 de 1945 al igual que el decreto 2127 de ese mismo año, este último que regula lo relativo al contrato de trabajo y prevé que se configura una relación laboral cuando concurren tres elementos a saber: la prestación personal del servicio, una retribución y la dependencia del trabajador respecto a su empleador y a modo de ejemplo enuncia algunas conductas que generan tal subordinación como la posibilidad de imponer un reglamento, la permanente existencia de órdenes y vigilancia en su cumplimiento; relación que no deja de serlo por la denominación que se dé o las condiciones de ejecución, estableciendo una presunción de existencia de relación laboral, en cuanto el artículo 20 del citado decreto reza: “*El contrato de trabajo se presume entre quien presta cualquier servicio personal y quien lo recibe o aprovecha; corresponde a este último destruir la presunción*”

La presunción se configura una vez se acredita la prestación personal de un servicio en favor de quien se predica empleador, y se derruye, con la demostración de que la labor no se prestó bajo un régimen contractual de índole laboral. Al respecto la sentencia SL 3397 de 2020.

Se presenta un desarrollo del postulado constitucional de primacía de la realidad sobre las formas (artículo 53 Constitución Política), a través del cual se develan las verdaderas relaciones, más allá de la apariencia que se haya dado a través de las denominaciones (al respecto la CSJ SL 3434 de 2019).

Desde esa perspectiva, cuando se someta a juicio el principio de la realidad sobre las formas, con el fin de establecer la existencia del contrato de trabajo, le corresponde al Juez, analizar las particularidades fácticas propias del litigio a fin de declarar o descarta los elementos configurativos del mismo, bajo una justa medida que pondere la protección al trabajador, los principios tuitivos del derecho laboral, pero a la vez reconociendo que no todo acto de instrucción o vigilancia, comporta la subordinación propia de la relación laboral, ya que al contratante siempre le asistirá el derecho de verificar que el producto o labor encomendada se satisfaga bajo parámetros de calidad y correcta ejecución (al respecto la sentencia CSJ SL2171-2019).

Con estas premisas se descende al **caso concreto**, encontrando que desde el escrito de demanda se señaló que los accionantes prestaron servicios a la accionada a través de diferentes intermediarios, frente a lo cual aparecen las siguientes pruebas:

**Guillermo León Garcés Ramírez** con el informe de cotizaciones en pensiones a través de la AFP Protección (fls 45/47, 210/212 y 216/218) se reflejan aportes a través de las siguientes empresas (**nombres como aparecen en la historia laboral**)

- “Aseo y sostenimiento y compañía”: Entre febrero de 2003 a junio de 2008 y de julio de 2009 a marzo de 2012
- “Corporación biensocial”: Entre junio de 2008 a junio de 2009.
- “Poliservicios SAS”: Entre abril de 2012 a octubre de 2014.
- “Fundación de apoyo a la univer”: Entre octubre de 2014 a marzo de 2016

- *“Uno A Aseo integrado SA”*: Entre julio de 2016 a febrero de 2017.

**John Bayron Díaz Vasco**, de acuerdo al reporte de cotizaciones a pensiones (fl. 54/55 y 213/214) se reflejan los siguientes extremos (**nombres como aparecen en la historia laboral**):

- *“Tempotrabajamos SAS”*: De junio de 2007 a noviembre de 2008
- *“Corporación cívica Santísima Trinidad”*: De julio a diciembre de 2012
- *“Unión Temporal Residuos C”*: Entre noviembre de 2013 a marzo de 2014.
- *“Fundación de Apoyo a la Universidad de Antioquia”*: Desde enero de 2015 a febrero de 2017

**Luis Eduardo Vasco Galvis** quien se reputa como empleado de la accionada desde febrero de 2010 (hecho 1 – fl. 14) y desde tal data aparecen las siguientes cotizaciones a la AFP Porvenir (fl. 65/66) - **nombres como aparecen en la historia laboral**:

- *“Corporación unidos por la comunidad”*: Entre febrero de 2010 a mayo de 2012
- *“Fundación integral de desarrollo humano”*: Entre mayo de 2012 a febrero de 2013
- *“Corporación jóvenes unidos para la paz”*: De marzo de 2013 a julio de 2014
- *“Club de desarrollo ecológico”*: En los meses de agosto a octubre de 2014
- *“Fundación Universidad de Antioquia”*: Entre octubre de 2014 a abril de 2015.

Valga reiterar que la declaratoria de existencia de una relación de naturaleza laboral para con esta accionada está sujeta a un sistema de cargas probatorias, donde a la parte accionada le corresponde demostrar la prestación del servicio, para activar la presunción de existencia del contrato, deber que no se satisfizo ora respecto a las cooperativas, sociedades y corporaciones anunciadas, como respecto a la Fundación Universidad de Antioquia, salvo para el señor John Bayron

Díaz Vasco y en un específico interregno de tiempo como se hará alusión más adelante, toda vez que no se tiene certeza que con las diferentes agremiaciones se hayan prestado servicios en favor de la accionada Emvarias, ni existan elementos de prueba que permitan afirmar categóricamente que en los periodos que allí aparecen cotizados, existiera un vínculo por el cual Emvarias le delegara la prestación del servicio de aseo.

Conclusión a la que no se llegó dada la precaria actividad probatoria ejercida por la activa, en tanto se limitó a adosar los históricos de aportes a seguridad social (fls 45/48, 54/55 y 65/66), unos carnet de identificación (fls. 48, 58 y 67), unos mapas (fls. 59, 89, 102, 103 a 107) que en nada ilustran sobre la prestación del servicio que se quiere probar.

Cometido que tampoco se logró con el testimonio de **Juan Guillermo Muñetón**, quien se identificó como compañero de trabajo de los accionantes, quien señaló que en Enviarias intervenían varias cooperativas, por tanto desconoce a cuál de ellas estaban asignados los accionantes, y la única información que brinda es haber visto a Luis Eduardo Vasco en el proceso de barrido y luego en recolección, pero nada relata respecto a sus horarios, rutas, extremos de vinculación; mientras que a Guillermo León Garcés lo conoció como recolector, que en algún momento coincidió con él en la cooperativa “Conmunipaz” la que valga indicar no está relacionada en la historia en pensiones de este accionante (fls 45/47, 210/212 y 216/218).

Como hechos generales y no referidos a ninguno de los accionantes, relató que el personal vinculado a través de las cooperativas debían presentarse a las instalaciones de Emvarias para recibir instrucciones por parte de personal de esta, pues pese a que también había coordinadores de las cooperativas, éstos solo tomaban la asistencia e imagina que autorizaban los permisos en caso de ser

necesario; adujo que existía personal vinculado directamente con Emvarias que realizaban la misma misión, pero se diferenciaban por las rutas que cumplían y el uniforme que portaban.

Expresó que los carros para la recolección eran propiedad de Emvarias, pero luego se llevaron unos camiones de color anaranjado, de propiedad de una empresa renting, desconociendo la negociación que existía para su suministro.

Para esta corporación lo dichos de este testigo comportan hechos generales y no específicos a la relación que se quiere demostrar con los actores, propias de su experiencia como conductor, cargo que no guarda identidad con el ejercido por los demandantes, por tanto, sus dichos resultan insuficientes para probar la predicada prestación del servicio para Emvarias.

Adicional se destaca que la existencia de una afiliación al sistema de seguridad social no constituye en sí misma prueba suficiente de una relación laboral, ya que esta declaración debe estar apoyada en elementos de prueba contundentes para generar el efecto pretendido, así lo indicó la Sala de Casación Laboral en sentencia del 10 de marzo de 2005, radicado 24313, que estableció:

*“...Y lo sostenido por el ad quem, en cuanto a que para cierta época aparezca afiliado el actor al ISS, no es suficiente para demostrar la existencia del contrato de trabajo al ser ello apenas un “mero indicio de ese tipo de vinculación”, no resulta un razonamiento equivocado, habida consideración que como lo ha reiterado la Corte de tiempo atrás “...el hecho de la afiliación al seguro social, no demuestra por sí sólo el contrato de trabajo, pues para la estructuración de este, se requiere la coexistencia de los elementos del contrato de trabajo...” (Sentencia del 18 de marzo de 1994, radicado 6261)*

Ahora bien, en cuanto a la vinculación con la Fundación Universidad de Antioquia, pese a que se desconoce los términos de la contratación, a través de la prueba



testimonial se aceptó el vínculo contractual entre esta fundación y Emvarias. Fue así que la testigo Lina Marcela Montoya, quien se identificó como empleada de Emvarias por más de 12 años y encargada de los procesos de contratación, señaló que, a través de una oferta directa y única, se generó con esta fundación un convenio de asociación, para la prestación del servicio de recolección y disposición final de residuos, así como el barrido en áreas públicas. Expresó que, en desarrollo de este, el contratista con total autonomía financiera, operacional y administrativa, vincula laboralmente su fuerza de trabajo, a quienes da instrucciones y remunera.

Se destaca que existen un elemento relativo al vínculo de los accionantes con la Fundación Universidad de Antioquia, identificando a Guillermo León Garcés Ramírez y Luis Eduardo Vasco Galvis como recolectores y John Bayron Díaz Vasco como operador de barrido, en tanto a folios fls. 48, 67 y 58, respectivamente, obra copia del carnet, que presenta una foto, nombre, número de cédula, grupo sanguíneo, oficio, y aparece el logo de esta fundación

Sin embargo, este documento no prueba la prestación del servicio en favor de la acá accionada, aspecto que de acuerdo a las cargas probatorias debía demostrarse con suficiencia a efectos de activar la presunción de existencia del contrato de trabajo.

Subraya la sala que respecto al demandante **John Bayron Díaz Vasco** a folio 57 obra un certificado expedido el 21 de julio de 2015, que señala la existencia de una relación laboral con la Fundación Universidad de Antioquia; contrato a término fijo entre el 30 de enero al 31 de diciembre de 2015, con una remuneración equivalente a \$644.350, en el cargo de “operario de barrido proyecto Emvarias”

Develando para este accionante y respecto al interregno corrido entre el 30 de enero y el 21 de julio de 2015 (fecha de expedición del certificado, pues se desconoce la suerte o finalización de este contrato) una prestación del servicio para la acá accionada, activando la presunción de existencia de un contrato de trabajo, misma que fue derruida por Emvarias, descartando cualquier condena como pasará a explicarse. se precisa que los argumentos a exponer son extensibles a todos los demás accionantes, Guillermo León Garcés Ramírez y Luis Eduardo Vasco Galvis, así:

La testigo **Lina Marcela Montoya** abogada de Emvarias y encargada de la contratación con la Fundación Universidad de Antioquia, indicó que esta no es una empresa de servicios temporales, sino que con ella se pactó un convenio de colaboración, que dentro de los términos de invitación se estableció que la fundación tendría autonomía financiera, administrativa y operacional, asignando supervisores para cada grupo de trabajadores, e impartiendo órdenes, además que el pago de los salarios a sus trabajadores los realiza directamente sin que intervenga Emvarias, pues se exige de aquella la capacidad económica para asumir las obligaciones laborales. Expresó que a esta fundación se le asignaron rutas para la recolección de residuos y barrido, donde no interviene personal directamente vinculado con Emvarias.

Precisó que la interventoría a este convenio no la ejerce la contratante, sino que se delegó al Colegio Mayor de Antioquia, quien asume una revisión integral a los contratos del área de operación de aseo, vigilancia administrativa, legal y financiera, por tanto, si existieran quejas se resuelven directamente con la fundación y esta las corrige con sus trabajadores, enfatizando que el personal de Emvarias tiene prohibido dar órdenes al personal de la fundación, además que no se comparten las zonas de ejecución de la labor.

Indicó que existen diferentes lugares de acopio. Así el personal de barrido, inician su labor desde las locaciones que indique la fundación, ya que estos deben tener instalaciones, mientras que los recolectores y conductores deben desplazarse a Emvarias donde se guardan los camiones, señalando que algunos son de propiedad de esta accionada y una gran cantidad, rentados.

A su vez, el señor **Juan David Calle Vélez**, quien se anunció como interventor del Colegio Mayor desde el año 2012 en el contrato de Emvarias y la Fundación Universidad de Antioquia, reiteró que la interventoría es técnica, operativa y administrativa de los contratos y convenios para el servicio de recolección, traslado de residuos y barrido, siendo de su resorte verificar que se estén cumpliendo con las rutas y que el barrido se haga bien y en la parte administrativa se verifican las facturas, se lleva un control del presupuesto, se audita el pago de salarios y aportes a seguridad social.

Especificó que la fundación tiene asignados supervisores por zonas y servicios, su actividad principal es verificar su prestación, por tanto cuando la interventoría tiene novedades, se comunican a los supervisores, para que estas se la trasladen al operario.

Por último, fue escuchado **Luis Fernando Gómez Sánchez**, empleado de Emvarias, Jefe de la zona 5 – poblado - por 4.5 años (a la fecha de la diligencia 16 de abril de 2018), quien refirió no conocer a los demandantes al no pertenecer a su zona, pero en términos generales expresó que él como jefe no emite órdenes al personal de la fundación, ya que todas las directrices las generan los coordinadores de esta entidad, siendo fácil diferenciar el personal, pues portan uniformes disímiles, además que el contratista plasma el número del contrato en él, además que no comparten las mismas zonas.

Aclaró que la mayoría de los camiones para la recolección son de “renting”, entregados al contratista para la ejecución de la labor, que el automotor se provee cuando inicia la ruta y cuando termina, se hacen chequeos a las condiciones de reintegro, a través de unos reportes que diligencia el conductor, y que estos formatos no son realizados por personal de Emvarias.

Son estas las pruebas aportadas al proceso, con las que se acreditó que Emvarias no ejerció una continuada subordinación de las labores de John Bayron Díaz entre el 30 de enero y el 21 de julio de 2015, como tampoco respecto a ninguno de los accionantes; se verificó con suficiencia que la Fundación Universidad de Antioquia contaba con personal que impartía las instrucciones a su personal, proveía uniforme, utensilios para barrido, elementos de seguridad, y carnet de identificación, acopiaba a los operarios de barrido en sus sedes y que se valía de los camiones de recolección que no eran propiedad de la accionada. Se insistió en que el personal que estaba vinculado directamente con la accionada no ejercía las labores conjuntamente con aquellos de la fundación, pues tenían rutas de recolección y aseo diferente.

En adición se estableció que la etapa de verificación y cumplimiento del contrato con la Fundación Universidad de Antioquia era desempeñada por un ente ajeno a Emvarias, lo que redundaba en la demostración de la ausencia de subordinación, quedando así derruida la presunción establecida en el artículo 20 del Decreto 2127 de 1945.

Y relativo a las entidades ASEO Y SOSTENIMIENTO SA, POLISERVICIOS SAS, CORPORACIÓN CÍVICA SANTÍSIMA TRINIDAD, UNIÓN TEMPORAL RESIDUOS COMUNA 15, CORPORACIÓN UNIDOS POR LA COMUNIDAD, CORPORACIÓN, UNO A ASEO INTEGRADO SA, TEMPOTRABAJAMOS SAS, FUNDACIÓN INTEGRAL DE DESARROLLO HUMANO, CORPORACIÓN JÓVENES UNIDOS PARA LA PAZ Y CLUB DE DESARROLLO ECOLÓGICO, que

corresponden a aquellas relacionadas en el escrito de demanda, no se estableció que existiera una prestación personal del servicio en beneficio de las Empresas Varias de Medellín, incumpliendo la carga probatoria mínima de la parte demandante que impide que se emita condena alguna en contra de la accionada.

Resta por indicar que no hay lugar a imponer condena alguna en los términos de los artículos 6 ó 7 del Decreto 2127 de 1945, esto es producto de una declaración de contratistas independientes o solidaridad con la empresa beneficiaria de la obra, por cuanto ninguna de las entidades que fungieron como empleadoras se vinculó al litigio, siendo imperiosa la participación en el trámite procesal de aquel que se reputa como empleador, pues es de éste de quien se demanda el cumplimiento de las obligaciones laborales y sólo en el evento que resulten prósperas, se analizará la existencia de la solidaridad frente al contratante.

Así las cosas, sin que se satisfagan los presupuestos para declarar la existencia de una relación laboral o alguna obligación a cargo de la accionada, próspera resulta la excepción de inexistencia de la obligación, conclusión a la que arribó la A quo y que se confirma en esta instancia.

Costas en primera instancia como dispuso la A quo. Sin costas dentro del grado de consulta.

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL, CONFIRMA** de forma total la sentencia revisada.

Costas en primera instancia como indicó la A quo. Sin costas dentro del grado de consulta.

Lo resuelto se notifica a las partes en ESTADOS. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

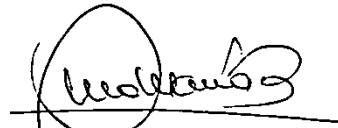
Los Magistrados,



**DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**



**MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**



**ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**

CERTIFICO: Que la anterior providencia fue notificada en Estados N° 98 publicados por medios digitales el 8 de junio de 2021